RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CINCUENTA Y SIETE CIVIL MUNICIPAL

Bogotá D.C., veintidós (22) de julio de dos mil veinte (2020)

ACCIÓN DE TUTELA No. 11001 40 03 057 2020 00313 00

Cumplido el trámite de rigor procede el Despacho a proferir la sentencia que en derecho corresponda.

ANTECEDENTES

1. La señora Diana Carina García Florián, presentó acción de tutela contra la Secretaría de Movilidad de Bogotá, manifestando vulneración al derecho fundamental del debido proceso.

2. Como elementos fácticos de su accionar, manifiesta que es propietaria de un automotor de placas RLQ-972, el cual, el pasado 13 de febrero de 2019, se encontraba estacionado al frente de su domicilio (diagonal 43 A No. 31-18), lugar, donde no hay señalización que prohíba parquear o que indique utilización de un mecanismo de control de vía.

2.1. Con el fin de obtener un paz y salvo, se percata que en la plataforma de la Secretaria de Movilidad, aparece una multa mediante un foto comparendo de fecha 13 de febrero de 2019 correspondiente a la orden N. 11001000000023182386.

2.2. En razón de lo anterior, mediante radicado SDM 222634 en el mes de agosto del año pasado interpuso un derecho de petición solicitando la revocatoria de dicha decisión, toda vez que dicho comparendo no se le había notificado en su lugar de domicilio, dirección que aparece actualizada en el RUNT.

2.3. Mediante oficio SDM-SC 190065 la encartada le contesta el mencionado requerimiento, indicándole que había intentado la notificación personal pero la misma no fue positiva por cuanto la dirección no existía, por lo que, procedió a notificarla por aviso. Frente a lo cual, presentó otro derecho de petición (6 de noviembre de 2019), mediante el cual buscaba controvertir lo afirmado por el ente encartado, siendo contestada por radicado SDM-SC 261161, sin embargo, no lo fue de manera completa ni de fondo.

2.4. Por radicado SDM 11896 presentó otra solicitud, en donde expuso las inconsistencias surgidas de la notificación, esto era, que en la causal de devolución era "NO RESIDE", mientras que el soporte de 4/72 indicaba que "NO EXISTE". Adicional a esto, la accionada confundió los dígitos de la orden de comparendo, aduciendo que no tenía sanción alguna impuesta a nombre de la tutelante.

2.4. La encartada no da una explicación de la regulación de instrumentos de control de vía apoyados por dispositivos electrónicos en la dirección diagonal 43 a No. 31-18, sino se limitó a explicar que los fotoccomparendos no son mecanismos de detención electrónica, incluso que no son actos administrativos, cuando la jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado lo contrario, por lo tanto solicitó información en cuanto a la notificación adelantada, la cual fue respondida pero no brindó contestación a cada una de la solicitadas allí descritas.

2.5. El 17 de marzo de los cursantes, presentó una acción de tutela invocando vulneración al derecho de petición, la cual conoció el Juzgado 16 Civil Municipal de Bogotá. Adicional a esto, el 19 de febrero presentó derecho de petición ante la Personería de Bogotá con el fin de que ejerciera control en procura de la guarda de sus derechos.

2.6. El 20 de febrero, la Secretaría acusada dio respuesta al petitum elevado, argumentando, entre otros, que la confusión entre las causales de devolución había sido un error de digitación y que no quebrantó su debido proceso administrativo, *"...cuando es evidente que la falta de notificación personal materializa esa vulneración"*.

2.7. La Personería de Bogotá le comunicó que iba a iniciar una investigación disciplinaria en contra de la Secretaría, y relativo a que, frente a la problemática presentada con la orden de comparendo, procedía la nulidad y restablecimiento del derecho, no obstante, debido a la falta de notificación, el término para incoar la acción ya caducó.

2.8. Desde el 15 de marzo hasta el 1 de julio de los cursantes por medio de los acuerdos que describe en el hecho 15, el Consejo Superior de la Judicatura suspendió los términos judiciales.

3. Pretende a través de esta queja el amparo de la prerrogativa invocada, y que se ordene a la entidad accionada que declare la nulidad del procedimiento administrativo adelantando que concluyó con el comparendo mencionado, y que elimine la sanción que le fue impuesta a la señora Diana Carina García Florián, y actualice el correspondiente registro de las bases de datos.

4. Una vez admitida la tutela y notificada en legal forma a la **SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ**, a través de su Director de Representación Judicial, señaló que en aplicación del artículo 135 de la Ley 769 de 2002 modificado por la Ley 1383 de 2010 (artículo 22, inciso 5), por medio tecnológico (cámara de video) previamente instalada, detectó conducta contravencional a las normas de tránsito y elaboró la orden de comparendo N. 1100100000002382386 de fecha 13 de febrero de 2019 al automotor de placa RLQ-972 por la infracción C-02.

Para el momento de la imposición de dicha multa, la señora Diana Carina García Florian era la propietaria del vehículo anteriormente relacionado, según la información registrada en el Organismo de Tránsito donde se encuentra matriculado el vehículo. Por lo anterior, y teniendo en cuenta el artículo 137 de la Ley 769 de 2000 y la Ley 1843 de 2017 (artículo 8), remitió a la dirección registrada en el RUNT (DG 43 A No. 31-18 en Bogotá), la notificación del comparendo, la cual fue devuelta por la causal de “NO EXISTE”.

Respecto a la confusión con la causal “NO RESIDE” indica que en la misma se presentó un error involuntario de digitación en el momento de preparar la respuesta al derecho de petición, sin embargo, la causal verdadera de devolución es “NO EXISTE” tal y como lo certificó el mensajero de correspondencia el señor Wilson Osorio, quien dejó la siguiente anotación “... DE CLL 42 PASA 53”.

En aras de garantizar el debido proceso de la tutelante, efectuó el correspondiente aviso (como otro medio de notificación) que efectuó de manera pública en la página web www.movilidadbogotoa.gov.co. Por resolución aviso 119 del 19 de marzo de 2019 notificó el 27 del mismo mes y año el comparendo N. 1100100000002382386.

Puntualiza que si el comparendo no es recibido en dirección (reportada) o se encuentra errada, o en ese destino no conocen al propietario del vehículo, o está incompleta, entre otras causales, para que se lleve a cabo el proceso de notificación contenido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo, en aplicación analógica de lo ordenado en el artículo 162 del Código Nacional de Tránsito, impuso dicha decisión a la accionante, mediante aviso.

Ahora si el presunto infractor esta en desacuerdo con la imposición del comparendo deberá proceder de acuerdo a lo previsto en los artículos 136 y 137 del CNT. En relación con la solicitud de revocatoria directa de actos administrativos de carácter particular, la oportunidad para interponerla es de cuatro (4) meses según lo establecido en el C.P.A.C.A.

Mediante Resolución No. 473285 declaró contraventor de las normas de tránsito a la señora Diana Carina García Florián.

Agrega que no ha quebrantado prerrogativa alguna de la convocante, ya que el proceso contravencional se adelantó de acuerdo a la normatividad vigente y en observancia de los principios legales que rigen la actuación administrativa, de acuerdo a la Resolución 3027 de 2010 (artículo 6 inciso 3).

CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela se constituye como un mecanismo previsto en la Constitución Política de 1991, cuyo fin primordial es la protección de los derechos fundamentales en caso de amenaza o violación por las autoridades públicas o los particulares, viabilizándose cuando no existe otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice de manera transitoria para evitar un perjuicio irremediable (art. 86 C.P. y Decreto 2591 de 1991).

2. En el caso concreto se impetró la protección de la anunciada prerrogativa, con el fin de que la SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ, declare la nulidad del procedimiento administrativo adelantando que concluyó con el comparendo N. 1100100000002382386, elimine la sanción impuesta a la señora Diana Carina García Florián, y actualice los registros de las bases de datos.

3. Frente al debido proceso¹ administrativo, la Corte Constitucional lo ha definido como “...*(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración,*

¹ El artículo 29 de la Constitución Política, señala que el debido proceso, “...se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia

materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que guarda relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal". Ha precisado al respecto, que con dicha garantía se busca "(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la validez de sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados"

En la misma providencia, se determinó que las garantías establecidas en virtud del debido proceso administrativo, son las siguientes:

"(i) ser oído durante toda la actuación, (ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido proceso."

(...)

En este orden de ideas, es importante realizar las siguientes precisiones, con base en lo sentado en el Código Nacional de Tránsito y la Jurisprudencia relacionada anteriormente:

1. A través de medios técnicos y tecnológicos es admisible registrar una infracción de tránsito, individualizando el vehículo, la fecha, el lugar y la hora, lo cual, constituye prueba suficiente para imponer un comparendo, así como la respectiva multa, de ser ello procedente (Artículo 129).

2. Dentro de los tres días hábiles siguientes se debe notificar al último propietario registrado del vehículo o, de ser posible, al conductor que incurrió en la infracción (Artículo 135, Inciso 5).

a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso".

3. La notificación debe realizarse por correo certificado, de no ser posible se deben agotar todos los medios de notificación regulados en la legislación vigente (Artículo 135, inciso 5 y Sentencia C-980 de 2010).

4. A la notificación se debe adjuntar el comparendo y los soportes del mismo (Artículo 135, inciso 5 y Ley 1437 de 2011, Artículo 72).

5. Una vez recibida la notificación hay tres opciones:

a. Realizar el pago (Artículo 136, Numerales 1, 2 y 3).

b. Comparecer dentro de los 11 días hábiles siguientes a la notificación de la infracción y manifestar inconformidad frente a la misma, evento en el cual se debe realizar audiencia pública (Artículo 136, inciso 2 y 4 y Artículo 137).

c. No comparecer dentro de los 11 días hábiles siguientes a la notificación de la infracción. En este evento, si la persona no comparece dentro de los 30 días hábiles siguientes a la infracción se debe proceder a realizar audiencia Artículo 136, inciso 3 y Artículo 137).

6. En la audiencia se puede comparecer por sí mismo el presunto infractor o por medio de apoderado, quien debe ser abogado en ejercicio (Artículo 138).

7. En audiencia se realizarán descargos y se decretarán las pruebas solicitadas y las que se requieran de oficio, de ser posible se practicarán y se sancionará o absolverá al presunto contraventor (Artículo 136, inciso 4).

8. Contra los autos proferidos en audiencia procede el recurso de reposición, el cual podrá ser presentado y sustentado en la misma audiencia y el recurso de apelación, el cual únicamente procede contra la resolución, con la que se ponga fin a la primera instancia (Artículo 142)".²

En resumen, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, dentro del debido proceso administrativo se debe garantizar: i) ser oído durante toda la actuación, ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley, iii) a que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, iv) a que se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación, v) a que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, vi) a gozar de la presunción de inocencia, vii) al ejercicio del

² Sentencia T-051 de 2016

derecho de defensa y contradicción, viii) a solicitar, aportar y controvertir pruebas, y ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido proceso. (Sentencia T-002 de 2019).

4. En apoyo de lo previsto en la citada jurisprudencia, verificado el escrito de tutela junto con sus anexos, y la respuesta proferida por la Secretaría de Movilidad de Bogotá, se anuncia el despacho adverso del amparo invocado por la señora Diana Carina García Florián, como pasa a explicarse.

En primer lugar, es preciso indicar que el Despacho no evidencia un quebranto del debido proceso alegado por la tutelante, como quiera que la Secretaría Distrital de Movilidad efectuó la notificación del comparendo N. 1100100000002382386 de acuerdo a lo señalado en la Ley 769 de 2002, puntualmente en lo previsto en su artículo 135 modificado por el artículo 22 de la Ley 1383 de 2010,³ pues téngase en cuenta, que según las constancias (impresiones de imagen) adjuntadas al escrito mediante el cual se descubre el traslado, información que se entiende rendida bajo la gravedad del juramento, la encartada remitió mediante correo certificado la orden de comparendo a la dirección diagonal 43 A No. 31-18 de esta ciudad, registrada ante el RUNT (Registro Único Nacional de Transporte) por el último propietario del vehículo de placas RLQ-972, esto es, la señora Diana Carina García Florián, imposición que fue infructuosa, ya que el certificado de envío remitido a través de la empresa 4/72 arrojó un resultado de que la dirección “NO EXISTE”, y además aparece una anotación del funcionario de mensajería que dice “...de Cil 42 pasa a

³ ARTÍCULO 22. El artículo 135 de la Ley 769 de 2002, quedará así:

Artículo 135. Procedimiento. Ante la comisión de una contravención, la autoridad de tránsito debe seguir el procedimiento siguiente para imponer el comparendo:

Ordenará detener la marcha del vehículo y le extenderá al conductor la orden de comparendo en la que ordenará al infractor presentarse ante la autoridad de tránsito competente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Al conductor se le entregará copia de la orden de comparendo.

Para el servicio además se enviará por correo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes copia del comparendo al propietario del vehículo, a la empresa a la cual se encuentra vinculado y a la Superintendencia de Puertos y Transporte para lo de su competencia.

La orden de comparendo deberá estar firmada por el conductor, siempre y cuando ello sea posible. Si el conductor se negara a firmar o a presentar la licencia, firmará por él un testigo, el cual deberá identificarse plenamente con el número de su cédula de ciudadanía o pasaporte, dirección de domicilio y teléfono, si lo tuviere

No obstante lo anterior, las autoridades competentes podrán contratar el servicio de medios técnicos y tecnológicos que permitan evidenciar la comisión de infracciones o contravenciones, el vehículo, la fecha, el lugar y la hora. En tal caso se enviará por correo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes la infracción y sus soportes al propietario, quien estará obligado al pago de la multa. Para el servicio público además se enviará por correo dentro de este mismo término copia del comparendo y sus soportes a la empresa a la cual se encuentre vinculado y a la Superintendencia de Puertos y Transporte para lo de su competencia.

El Ministerio de Transporte determinará las características técnicas del formulario de comparendo único nacional, así como su sistema de reparto. En este se indicará al conductor que tendrá derecho a nombrar un apoderado si así lo desea y que en la audiencia, para la que se le cite, se decretarán o practicarán las pruebas que solicite. El comparendo deberá además proveer el espacio para consignar la dirección del inculcado o del testigo que lo haya suscrito por este.

53”, luego el resultado arrojado conllevó a que la misma procedería con las normas análogas (artículo 162 Ley 769 de 2002)⁴ con el fin de imponer dicha decisión en legal forma.

En efecto, y al no lograr esta notificación de manera personal, acudió al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contenciosos Administrativo (Ley 1437 de 2011),⁵ procediendo a la publicación del aviso (Resolución 119 del 19 de marzo de 2019)⁶ en su página web www.movilidadbogota.gov.co, por lo tanto, se observa que la entidad tutelada agotó los mecanismos pertinentes con miras de dar a conocer dicho comparendo.

Ahora bien, y relativo a la discusión planteada por la hoy convocante, a lo largo de sus peticiones, frente a la indebida notificación, ya que aduce que le brindaron una información errónea, por cuanto, en unas respuestas proferidas por la encartada se adujo que el resultado de la imposición del comparendo era que no residía en dicha dirección y en otras que la causal de devolución competía a que la dirección no existía, la Secretaría acusada informó “...Respecto a la confusión con la causal NO RESIDE, nos permitimos informar que la misma se presentó por un error involuntario de digitación en el momento de preparar la respuesta al derecho de petición, sin embargo la causal verdadera de devolución es NO EXISTE como se evidencia en la imagen expuesta anteriormente donde se observa en la casilla de causal de devolución que fue marcado el recuadro de NO EXISTE por parte del mensajero de correspondencia Wilson Osorio el 26 de Febrero de 2019 y donde se deja la anotación DE CLL 42 PASA 53, por lo que se aclara así el argumento y petición de la accionante”.

⁴ ARTÍCULO 162. COMPATIBILIDAD Y ANALOGÍA. Las normas contenidas en el Código Contencioso Administrativo, Código Penal, Código de Procedimiento Penal y Código de Procedimiento Civil, serán aplicables a las situaciones no reguladas por el presente código, en cuanto no fueren incompatibles y no hubiere norma prevista para el caso en análisis.

⁵

ARTÍCULO 69. NOTIFICACIÓN POR AVISO. Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino.

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso.

En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha en que por este medio quedará surtida la notificación personal.

⁶ Consultado el día de hoy en la página web de la Secretaría de Movilidad https://www.movilidadbogota.gov.co/web/comparendos_electronicos

En ese orden de ideas, se indica a la tutelante que la Secretaría no ha incurrido en actos que vulneren su debido proceso, en punto a la notificación que se adelantó con el fin de lograr la imposición de la orden de comparendo.

Sin embargo, y pese a que lo aquí expuesto, no es óbice para que la señora Diana Carina García Florián pueda acudir a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, a efecto de incoar la acción pertinente - de nulidad y restablecimiento del derecho y la suspensión provisional del acto administrativo- de cara a la Resolución No. 473285 mediante la cual la Secretaría de Movilidad de Bogotá la declaró contraventor de las normas de Tránsito como conductora del vehículo de placas RLQ-972 respecto de la orden de comparendo N. 1100100000002382386, código de infracción C2, donde, además le impuso una multa de 15 SMDLMV equivalentes a \$414.000, más aún, cuando el Consejo Superior de la Judicatura – Presidencia mediante Acuerdo PCSJA 20-11567 del 5 de junio de 2020 dispuso entre otros, el levantamiento de la suspensión de términos judiciales a partir del 1 de julio hogaño.

En este punto se aclara que contrario a lo argüido por la tutelante en el hecho 14, la Personería de Bogotá mediante misiva adiada 2 de marzo de 2020, le indicó que *“... Ahora bien, como en el caso expuesto por su parte, la Secretaría Distrital de Movilidad decidió en forma desfavorable la revocatoria directa y conforme al artículo 43 del Código Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, es un Acto definitivo, razón por la cual lo jurídicamente procedente es acudir a la jurisdicción contenciosa, por cuanto, los actos administrativos están revestidos de la presunción de legalidad, hasta que esta no sea derrotada por el Juez Natural. La decisión de acudir a esta instancia será de resorte del ciudadano, ya que la acción contenciosa es rogada y cuando el Acto Administrativo afecta o incide una situación particular y concreta, debe ser activada a petición de parte”*

Por lo tanto, aún cuenta la accionante con los medios y mecanismos alternativos para acudir en pos de su reclamo y exhibir cada una de las pruebas recaudadas en miras de exponer su inconformidad de cara al procedimiento administrativo adelantado por la Secretaría de Movilidad de Bogotá, como lo es ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. En ese sentido, no es dable para el Juez de Tutela asumir una decisión que debe ser estudiada por el Juez Natural.

Tampoco se advierte la inminencia de un perjuicio irremediable que habilite su amparo en forma transitoria,⁷ pese a que se haya argüido que el término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (4 meses establecido en el CPACA) que indica la petente se encuentra más que precluido, y que no pudo ejercer debido a la “negligencia y desidia” por parte del ente encartado, de los derechos de petición presentados por la demandante y las respuestas proferidas por la Secretaría Distrital de Movilidad (adjuntas al escrito de tutela), se observa que frente a la solicitud de revocatoria de comparendo electrónico presentada el 8 de noviembre de 2019 por parte de la accionante, mediante radicado SDM-SC-261161 (adiado 11 de diciembre de 2019) la Secretaría resolvió dicho requerimiento (revocatoria) de manera adversa indicándole que ésta figura jurídica únicamente procedía contra actos administrativos, además, le informó que el 5 de agosto de 2019 expidió la Resolución No. 473285, en razón a que “...transcurridos 30 días, contados a partir de la notificación, términos establecidos en la Ley 1383 de 2010 art. 24, la Autoridad de Tránsito procedió a expedir resolución sancionatoria No. 473285 de fecha 05-08-2019 que lo (a) declaró contraventor (a) la cual fue notificada en estrados conforme lo establece el Art. 139 del Código Nacional de Tránsito”, es decir, que la petente, para el mes de noviembre de 2019 conocía del trámite que se adelantaba en su contra, teniendo oportunidad para recurrir dicha decisión (Resolución No. 473285 adiada 5 de agosto de 2019), pues para esa época aún no habían fenecido los cuatro (4) meses para interponer la acción correspondiente.

En ese sentido, no puede endilgarse culpa a la Secretaría respecto a la preclusión de dicho término como lo alega la demandante, pues, tenía desde el 5 de agosto de 2019 data en la cual se notificó la mencionada Resolución por estrados⁸ hasta el 5 de diciembre del año anterior, para interponer las acciones necesarias para controvertir dicha decisión, sin que así lo hiciera, más aún, cuando la tutelante tenía

⁷ Sentencia T-586 de 2006, “...Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. **Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.** De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última”. – Resalta el Despacho-.

⁸ CNT, artículo 136, numeral 3, inciso 3 “... Si el contraventor no compareciere sin justa causa comprobada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del comparendo, la autoridad de tránsito, después de treinta (30) días calendario de ocurrida la presunta infracción, seguirá el proceso, entendiéndose que queda vinculado al mismo, fallándose en audiencia pública y notificándose en estrados”.

conocimiento de la decisión objeto de nulidad, luego no puede predicarse perjuicio irremediable cuando la omisión de adelantar los mecanismos legales, recae sobre la interesada, quien tuvo la oportunidad de impugnar dicho acto administrativo en aquel momento, sin ejercer mecanismo alguno.

Además, tampoco se individualizó la situación concreta que afecta su prerrogativa,⁹ tan sólo arguyó una presunta irregularidad del procedimiento administrativo, luego no es dable para el Juez de Tutela ordenar la revocatoria, nulidad o dejar sin efectos una decisión frente a la cual la petente tuvo oportunidad de rebatir, no obstante, se itera, que pese a lo descrito en líneas anteriores, la convocante, tiene la facultad de acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo con el fin de obtener la guarda de sus derechos, ya que por esta vía no se cumplen los requisitos mínimos para ordenar la nulidad de los mencionados actos.

Bajo ese contexto se impone denegar el amparo interpuesto, habida cuenta que no se evidencia vulneración alguna a la prerrogativa invocada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO CINCUENTA Y SIETE CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley;

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR el amparo invocado por **DIANA CARINA GARCÍA FLORIÁN**, por las consideraciones anteriormente expuestas.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta determinación a las partes por el medio más expedito.

⁹ Sentencia T- 143 de 2012, “...la acción de tutela procederá como mecanismo transitorio, a pesar de la existencia de un medio judicial ordinario idóneo y eficaz, cuando es necesaria para evitar un perjuicio irremediable, apreciación a la cual se llega previa ponderación por parte del juez de ciertos requisitos: (i) Se trata de una persona de la tercera edad, considerada sujeto de especial protección; (ii) El estado de salud del solicitante y su familia; (iii) Las condiciones económicas del peticionario (iv) La falta de pago de la prestación o su disminución, genera un alto grado de afectación de los derechos fundamentales, en particular del derecho al mínimo vital. (v) El afectado ha desplegado cierta actividad administrativa y judicial, tendiente a obtener la protección de sus derechos, y (vi) El interesado acredita, siquiera sumariamente, las razones por las cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la protección inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados”.

TERCERO: REMITIR oportunamente las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si el fallo no fuere impugnado.

NOTIFÍQUESE,

**MARLENNE ARANDA CASTILLO
JUEZ**

Firmado Por:

**MARLENE ARANDA CASTILLO
JUEZ MUNICIPAL
JUZGADO 057 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C.**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

06f386103febb38b9d0360fe166a741ad183e521f4df11a1f098e1b20361b259

Documento generado en 22/07/2020 03:42:34 p.m.